

URGENTE

Bogotá D.C., 4 de julio de 2014

Of N° 402501-0788/14

Mayor General

HUMBERTO GUATIBONZA CARREÑO

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Ciudad

Asunto: Informe de Riesgo N° 015-14, inminencia¹, para la protección de la población civil, así como la adopción de medidas urgentes a fin de neutralizar y mitigar el riesgo por el uso indiscriminado de armas ciegas² en el Distrito capital.

Respetado Mayor General Guatibonza:

De manera atenta, y con el fin de que se adopten las medidas efectivas de prevención y protección de los derechos humanos de la población civil, me permito remitir el Informe de riesgo de Inminencia de la referencia, en el que se describen los factores de amenaza para los habitantes de la ciudad de Bogotá que estarían expuestos a los efectos indiscriminados por el empleo de artefactos explosivos por parte de los grupos armados al margen de la ley.

Contextualización del riesgo y antecedentes

En el Distrito Capital, la acción permanente de la Fuerza Pública ha impedido que se fortalezcan las estructuras armadas ilegales en Bogotá y que frentes de la guerrilla ingresen a la ciudad procedentes de la zona rural de los departamentos circunvecinos. Sin embargo, en términos del conflicto armado, el Distrito Capital continúa siendo de interés para los actores armados ilegales.

Es importante señalar que la presencia de los grupos armados ilegales en sectores urbanos no siempre se traduce en acciones bélicas, propias del combate y de la confrontación armada, sino que, muchas veces se manifiestan a través de la amenaza de muerte, las restricciones a las libertades fundamentales, el homicidio, la desaparición, el reclutamiento, la extorsión, el desplazamiento forzado

¹ Los informes de riesgo de inminencia se emiten teniendo en cuenta la gravedad y alta probabilidad de concreción del riesgo por acciones de grupos armados al margen de la ley, con el objeto que las autoridades adopten las medidas requeridas y ajustadas a la calidad de las amenazas identificadas. El informe de inminencia se tramita de manera excepcional y su emisión obedece a los parámetros y criterios establecidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. El texto de este informe es abreviado y en él se evalúan las circunstancias de tiempo, modo y lugar y las dinámicas de los actores armados irregulares. Las características de la comunidad, los indicios y hechos generadores del riesgo, señalando las recomendaciones según el mandato y la competencia de la autoridad concernida. Por tratarse de amenazas con alta probabilidad de ocurrencia y que requieren una atención prioritaria, su destinatario son las autoridades pertenecientes a la fuerza pública y las autoridades civiles de la región o localidad (Defensoría del Pueblo. Revista Población Civil. No. 4 Pág. 31, febrero de 2006).

² ARMAS "CIEGAS": armas que no pueden dirigirse con seguridad razonable en contra de objetivos militares y que por lo tanto son susceptibles de golpear a civiles sin ninguna distinción. Un carro bomba es frecuentemente usado de manera que se convierte en el ejemplo perfecto de dicha arma. Tomado de CIDH. Informe Colombia. OEA/ Ser.L/V/II.102Doc. 9 Rev. 1 26 febrero 1999 Original: inglés.

URGENTE

y acciones que vulneran los derechos fundamentales de la población civil y que configuran graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En Bogotá, ciudad que se constituye en el principal centro político, cultural y económico del país, la violencia adquiere mayor relevancia. Por esta razón, las guerrillas y los grupos armados surgidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC procuran llevar a cabo acciones violentas de resonancia e impacto mediático, sobre todo aquellas tienen la finalidad generar terror en la población, alterar el orden público y alcanzan propósitos de carácter político y económico.

Los actos de violencia que se han registrado en la ciudad de Bogotá, en las últimas semanas, además de plantear una grave amenaza para los derechos humanos de la población, pone de presente el uso de la violencia indiscriminada a través de la instalación y detonación de artefactos explosivos improvisados, en la cual los blancos varían de acuerdo con las circunstancias e incluyen a personas, instituciones y bienes civiles. Este tipo de prácticas violentas que buscan sembrar el pánico, se sustentan en el miedo, el terror y la zozobra ciudadana.

En determinadas circunstancias o coyunturas de tipo social o política se producen situaciones de riesgo y amenazas que se traducen en graves ataques contra la seguridad ciudadana y los derechos de la población civil. La forma más evidente de esta violencia es el uso de métodos y medios para generar terror representados entre otros por el empleo de armas ciegas, que tienen un efecto indiscriminado sobre la población.

En Bogotá, durante el período 2006-2009 se reportaron 29 acciones relacionadas con el uso de artefactos explosivos y durante el 2011, se conoció de al menos 08 atentados con artefactos explosivos que produjeron afectaciones a la población y a los bienes civiles³.

En el año 2010, el 12 de agosto a las 5:30 a.m., ocurrió el atentado con un carro bomba frente a la edificación ubicada en la Calle 67 con Carrera Séptima, donde funciona la emisora Caracol y otras oficinas, que causó heridas a cinco personas y cuantiosos daños materiales. Según las autoridades, el presunto responsable de ese ataque terrorista fueron las FARC.

Para el año 2012, tres personas, entre ellos una mujer, murieron al presentarse una explosión en una residencia por la presunta manipulación de explosivos. Una cuarta persona y nueve vecinos resultaron heridos en la deflagración, que se presentó en la localidad de Suba, según informes de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá. En el mismo incidente el director del Fondo de Atención y Prevención de Emergencias (FOPAE) de Bogotá, dijo que la explosión dejó daños o destrozos en 51 domicilios y doce vehículos.

³ 15 de abril de 2011 Bogotá D.C. Localidad de Suba, Barrio Aures II. Dos personas heridas y cuantiosos daños materiales dejó la explosión de una granada en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. La granada fue puesta en un local de venta de pollos en el barrio Aures II, donde dos jóvenes resultaron heridas por esquirlas y una mujer atendida por un ataque de pánico. Así mismo se reportó daños en el local comercial y en seis casas aledañas al sector.

URGENTE

Igualmente, el 13 de abril de 2012, poco después de la llegada a Colombia del Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se reportó el estallido de dos artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá. La Policía Nacional informó que las explosiones se registraron en cercanías a la sede de la Fiscalía General de la Nación y de la Embajada de los Estados Unidos y que no produjeron víctimas. El 15 de mayo de 2012, a las 11:00 a.m., en la calle 74 con avenida Caracas, un desconocido (al parecer disfrazado de vendedor ambulante con chaqueta y peluca) puso una bomba tipo lapa en uno de los vehículos del esquema de seguridad del ex ministro Fernando Londoño. En el hecho, dos de los escoltas del protegido resultaron muertos y al menos 54 personas heridas. Según el Director de Unidad de Protección del Ministerio del Interior señaló que informes de inteligencia del Estado habían alertado de intenciones de actores armados ilegales de atentar contra el ex ministro Fernando Londoño.

De acuerdo con lo descrito, se observa que el Distrito Capital no está exento de las acciones violentas mediante el uso de artefactos explosivos o armas ciegas por parte de las FARC, ELN, organizaciones armadas post desmovilizadas de las AUC u otras agrupaciones delictivas, que con diferentes objetivos políticos o económicos pretenden atacar instalaciones de la Fuerza Pública, oficinas del Estado, establecimientos comerciales, medios masivos de transporte, espacios públicos, que pueden vulnerar los derechos fundamentales de la población.

La normativa humanitaria prohíbe a las partes en conflicto llevar a cabo actos o amenazas que infundan terror e intimidación entre la población civil. Este tipo de conducta se constituye en una infracción a la norma conocida en el DIH como “Principio de Distinción” que establece que las personas que participan en los conflictos armados deben distinguir, en toda circunstancia, entre civiles y combatientes y entre bienes civiles y objetivos militares.

Factores de amenaza

Las FARC y el ELN, integrantes de las agrupaciones armadas post – desmovilización de las AUC que se autodenominan Los Rastrojos Comandos Urbanos, Las Águilas Negras Bloque Capital y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras organizaciones al margen de la ley, con fines extorsivos y/o políticos pueden acudir al uso de explosivos.

A continuación se relacionan, de manera cronológica, algunos hechos que evidencian el riesgo de probables atentados con artefactos explosivos en el Distrito Capital:

El 10 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 7:15 de la noche se registró una explosión en la carrera 13 con calle 35, en el sector de Teusaquillo, cerca de una sede del Banco de Bogotá donde resultaron tres personas heridas.

El 22 de marzo de 2014, unidades de la Policía Nacional, en una zona próxima a la carrera 30 con la calle 53, interceptaron una camioneta en cuyo interior hallaron 12 barras del explosivo conocido como Indugel y cordón detonante con el que supuestamente se iba a activar la carga explosiva. En el mencionado operativo fueron capturadas dos personas dentro del vehículo.

URGENTE

El 8 de abril de 2014 a las 8:00 p.m. dos detonaciones fueron escuchadas y reportadas por los habitantes en el sector de Chapinero y en los cerros orientales de Bogotá. El 9 de abril, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la fuerte detonación en el cerro El Cable había se produjo por la activación de un artefacto explosivo compuesto por 900 gramos de pentolita que buscaban afectar una torre de conducción de energía eléctrica.

El 1 de junio de 2014, en inmediaciones de la calle 40 con carrera 80 sur, localidad de Kennedy, una persona desconocida activó un petardo de bajo poder que causó daños materiales en por lo menos ocho viviendas del sector. Las autoridades atribuyen el hecho a una extorsión que iba dirigida contra un comerciante del sector por parte del frente 53 de las FARC.

En horas de la noche del domingo 15 de junio se presentó una explosión originada por una granada que fue lanzada contra una vivienda ubicada en el barrio el Uval de la localidad de Usme. Según la información de las autoridades dicho atentado pudo obedecer a una disputa entre grupos ilegales por el control del negocio del tráfico de estupefacientes del sector.

El 20 de junio de 2014, aproximadamente a las 4:15 fue detonado un artefacto explosivo improvisado en la calle 64 con 9, al lado del CAI que se halla en inmediaciones del parque de Lourdes. La activación del artefacto explosivo ocasionó heridas a una persona civil, a dos uniformados de la Policía Nacional y daños materiales a los edificios cercanos al CAI en donde se había abandonado el artefacto. Según el reporte de las autoridades, se habrían usado 500 gramos de pentolita para producir la detonación.

El 25 de junio de 2014, se tuvo conocimiento de la activación de tres artefactos explosivos de bajo poder (tipo petardo) y la desactivación de tres más en diferentes partes del Distrito Capital. En los sitios donde detonaron los artefactos (bombas panfletarias) se encontró esparcida propaganda de las FARC alusivas a la conmemoración de los 50 años de existencia de esta guerrilla. Las localidades donde se registraron estos eventos fueron Suba, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, y Chapinero. La detonación de estos petardos no causó víctimas civiles.

El 30 de junio de 2014 El ELN se reivindicó el atentado perpetrado el pasado 20 de junio contra una estación de Policía en Bogotá, que dejó un civil y dos uniformados heridos. "En junio 20, en el parque Lourdes, en Bogotá, atacamos el CAI de la Policía, en que quedan heridos un sargento y un policía", confesó el ELN en un parte de guerra difundido en su página web. Aparte de los heridos, la onda expansiva afectó a ocho edificios residenciales, una iglesia cercana, un centro educativo y una camioneta que circulaba por el lugar.

El 1 de julio de 2014 explotaron dos "artefactos panfletarios" en la carrera séptima con calle 16 y el otro en el mismo corredor vial a la altura de la calle 18. De acuerdo con las autoridades no se registraron personas heridas ni daños materiales. Los artefactos contenían panfletos alusivos a los 50 años de la guerrilla del ELN.

En los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas, para la ciudad de Bogotá, se ha descrito y advertido a las autoridades competentes la

URGENTE

presencia de grupos armados ilegales, que utilizan tácticas y estrategias, sin comprometerse en una acción bélica directa, lo que produce como resultado un fuerte impacto en los derechos fundamentales de la población e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, debido al uso de la violencia indiscriminada que pone en riesgo a la población civil y a sus bienes.

La presencia de miembros y milicias de las guerrillas de las FARC y el ELN tiene como objetivo utilizar el territorio con fines económicos, políticos y armados. Estas guerrillas llevan a cabo amenazas, presiones y hostigamientos contra los pobladores de barrios periféricos y dirigentes sociales y políticos que consideran contrarios a sus propósitos. Las milicias o integrantes de la guerrilla que provienen de los departamentos del Meta, Arauca, Tolima, entre otros serían los presuntos generadores de riesgo vulneraciones a los derechos humanos en los eventos que opten por la instalación y activación de artefactos explosivos en el Distrito Capital

Por otro lado, los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, buscan mantener el control de las fuentes de financiación ilegal de las antiguas estructuras de las AUC e impedir que en los territorios bajo su influencia actúen grupos rivales y evitar la presencia de organizaciones y/o personas y/o estructuras de las FARC o el ELN. Desde su aparición, estas estructuras armadas ilegales, promueven en el imaginario colectivo pautas de comportamiento y regulación social mediante la administración de la violencia y la amenaza, dominan el negocio de tráfico y microtráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y contribuciones forzadas, entre otras actividades ilícitas.

Si bien es cierto la dinámica del conflicto en la ciudad tiene manifestaciones diferenciadas con respecto a lo que sucede en territorio rural, también es cierto que el accionar de integrantes de los grupos armados ilegales en la ciudad, en cualquiera de sus denominaciones, afecta en forma grave los derechos fundamentales de las personas, especialmente, los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal.

Ante la amenaza que representa el empleo de artefactos explosivos, cualquiera sea el tipo, componente y modalidad de ataque, o así sea que se consideren que son mecanismos o sistemas de sencilla elaboración o débil eficacia, es necesario que las autoridades fortalezcan las labores de análisis, de inteligencia y las medidas de seguridad, con respecto a esta situación, con el fin de prevenir la ocurrencia de acciones violentas de carácter indiscriminado que infundan terror y pánico en la población.

En virtud de lo anteriormente descrito, de manera comedida me permito formular las siguientes recomendaciones:

1. Al Señor Alcalde Mayor de Bogotá, coordinar con la Fuerza Pública, diseñar y adoptar estrategias y medidas de carácter político, jurídico y social, para la prevención, disuasión y represión legítima de los hechos violentos o delictivos en el Distrito Capital de Bogotá, como parte de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos comprometidos directamente en la política de seguridad ciudadana. De manera particular, se requiere que las autoridades apliquen medidas que estén destinadas a frustrar y evitar la comisión de acciones terroristas en la ciudad de Bogotá.

URGENTE

2. Al señor Alcalde Mayor de Bogotá, elaborar planes de contingencia y prevención de posibles amenazas de actos terroristas en la ciudad de Bogotá que afecten el derecho a la vida de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública y que produzcan daños a los bienes civiles, especialmente aquellos protegidos por el derecho internacional humanitario, como son los centros culturales, instituciones educativas y religiosas, instalaciones públicas y privadas que presten servicio de salud, medios de comunicación y en general, las edificaciones de carácter estatal y establecimientos de comercio.
3. Al señor Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y a los demás organismos de seguridad del Estado, fortalecer las labores de inteligencia en el Distrito Capital con el fin de detectar, contrarrestar y neutralizar el accionar de los grupos ilegales como también la posible ejecución de atentados terroristas en el Distrito Capital que vulneren los derechos fundamentales de la población.
4. Al señor Alcalde Mayor de Bogotá, promover medidas administrativas o de otra índole a fin de que la infraestructura institucional esté en condiciones de brindar una atención amplia, rápida y adecuada a las potenciales víctimas de las acciones que pretenden generar terror en la ciudad.
5. A todas las autoridades civiles, a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad y periódicamente al SAT de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas derivadas del presente informe y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita

Agradezco la amable atención y la pronta respuesta sobre las decisiones y medidas aplicadas para conjurar y mitigar el riesgo descrito.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN

Defensor Delegado para la prevención de riesgos de
Violaciones a los Derechos Humanos y DIH
Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT